

**ASUNTO: RADICACIÓN COMITE DE CONCILIACION. RAD: 76001310500220230042600.
DTE: JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ. DDO: COLPENSIONES**

DANNA ARBOLEDA AGUIRRE <danna.272003@gmail.com>

Lun 1/04/2024 12:17 PM

Para: Juzgado 02 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j02lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (208 KB)

CERTIFICACIÓN JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ .pdf;

Señores, Juzgado Segundo (02) Laboral del Circuito de Cali.

Cordial saludo.

Danna Arboleda Aguirre identificada con Cc 1.053.851.176 y TP 347.700 del Consejo Superior De La Judicatura actuando en calidad de apoderada sustituta de COLPENSIONES, por medio del presente me permito radicar **CERTIFICADO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN** para el proceso de radicado 76001310500220230042600 donde funge como parte demandante el señor JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ en contra de COLPENSIONES.

Se solicita amablemente que los documentos adjuntos sean incorporados al expediente y tenidos en cuenta para los fines pertinentes.

FAVOR ACUSAR RECIBO.

Atentamente,

DANNA ARBOLEDA AGUIRRE-
Abogada

CERTIFICACIÓN NO. 052462024

La secretaria técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

CERTIFICA

Que tal y como consta en el Acta No. 047-2024 del 12 de marzo de 2024 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, respecto del proceso bajo radicado No **76001310500220230042600** instaurado por el (la) ciudadano(a) **JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No **19491431**, en, quien pretende: que se declare nulo e ineficaz el traslado que hizo al Régimen de Ahorro Individual a través de COLFONDOS S.A., PENSIONES Y CESANTIAS, y, en consecuencia, debe ordenarse a COLPENSIONES aceptar al señor JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ como afiliado del Régimen de Prima Media, dicho órgano decidió :

NO proponer fórmula conciliatoria, en consideración a lo siguiente:

Atendiendo a las particularidades del caso concreto, destáquese que el señor JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ estuvo afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales – ISS hoy Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, a partir del mes de agosto de 1986 y hasta el mes de agosto de 1998, de conformidad con los supuestos facticos expuestos en el libelo introductor y como se advierte de la Historia Laboral del demandante, expedida por COLFONDOS S.A., PENSIONES Y CESANTIAS.

La anterior situación permite concluir que el demandante estuvo afiliado al RPM aproximadamente 12 años, tiempo durante el cual JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ tuvo la oportunidad de conocer el funcionamiento del régimen, posibilidad de asesoría y discernimiento sobre la preferencia y conveniencia de estar afiliado al RPM administrado hoy por COLPENSIONES, concluyendo que su mejor opción era realizar un traslado de régimen escogiendo para tal hecho solicitar afiliación a través de la administradora de pensiones COLFONDOS S.A., PENSIONES Y CESANTIAS, entidad a la cual tuvo afiliación a partir del 01 del mes de octubre de 1998, de conformidad con la información consultada en la plataforma RUAF – SISPRO, permaneciendo afiliado a dicho régimen y a través de la misma administradora de fondo de pensión y cesantías hasta la actualidad, advirtiéndose que el señor JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ estuvo retirado del sistema general de pensiones por dos meses y al retornar al mismo decidió hacerlo a través del RAIS, de modo que su intención ha sido estar afiliado al régimen de ahorro individual (RAIS) durante los últimos 25 años, tiempo durante el cual ha disfrutado de los beneficios del ahorro individual y en el cual cuenta actualmente con posibilidad de acceder a beneficio pensional.

No obstante, es claro que la motivación del actor en retornar al RPM obedece a un interés netamente económico, como el mismo demandante indica, la mesada pensional que podría obtener en el RPM es superior a aquella que se le otorgaría en el RAIS, no obstante, dicho interés económico no está llamado a ser atendido por medio de la acción judicial que aquí nos convoca, ya que el señor

JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ debió adelantar en contra de la AFP una acción de responsabilidad de resarcimiento del eventual daño o perjuicio ocasionado respecto a mesada pensional, sin que sea procedente llamar a mi representada resarcir un daño el cual no ocasiono si se tiene en cuenta que COLPENSIONES es un tercero totalmente ajeno a los negocios jurídicos que la parte demandante realizó con la codemandada, sumado al hecho de que el actor contaba con total capacidad de asesoría y consulta para determinar el régimen de su conveniencia, pero que en ningún momento considero como opción pertenecer nuevamente al RPM, más que por evidenciar un presunto perjuicio en su mesada pensional, sin tomar en cuenta que durante todos estos años ha reafirmado su decisión de pertenecer al RAIS a través de los actos de relacionamiento desencadenados tales como la recepción de correspondencia, de estratos de su cuenta individual y asesorías que iniciaron desde el momento mismo de su traslado las cuales fueron motivo de convencimiento para la suscripción del formulario.

Aunado a lo anterior, tenemos que al momento en que se expidió la Ley 100 de 1993, el demandante tenía la posibilidad de escoger cualquiera de los dos regímenes que fueron creados, resultando que con la suscripción del formulario en la entidad codemandada, JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ tomó la decisión de manera libre y espontánea de trasladarse a la AFP COLFONDOS S.A., PENSIONES Y CESANTIAS, entidad esta última en la cual ha permanecido más de 25 años, entendiéndose así, su deseo de acogerse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, al cual si bien sus primeras afiliaciones fueron intermitentes, no menos cierto es que su voluntad siempre fue permanecer al RAIS.

De ahí que, en el sub lite es el demandante quien debe acreditar que la información suministrada por la AFP del RAIS, fue equivocada o engañosa, situación que desde ya se advierte que no logra ser demostrada más allá de los dichos de la parte actora, pues por el contrario el error de la información no puede pregonar en este caso cuando la voluntad del señor JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, ha sido permanecer por más de veinticinco (25) años en dicho régimen, contando con toda posibilidad de consulta y asesoría para determinar el fondo de pensiones que mejor le beneficiaba, sin que por otro lado, años después, considere que la simple enunciación de que el valor de la mesada pensional varía entre los dos regímenes, sea motivo suficiente para acceder a las pretensiones del escrito de demanda, debido a que, conforme las disposiciones de la Ley 100 de 1993 ambos regímenes pensionales concurren legalmente, enfatizando que si el accionante tenía dudas acerca de la información suministrada, debió acudir directamente a la entidad donde se encontraba afiliado para comparar cuál de los dos regímenes era el que más le beneficiaba, infiriendo que su desidia u omisión en aquel momento, en modo alguno puede considerar enmendar con el presente litigio, fundamentando que en la actualidad la información que se le comunicó fue engañosa.

En ese sentido, es de mencionar la figura señalada por la Corte Suprema de Justicia como actos de relacionamiento, los cuales según la sentencia SL 1452 de 2019 están constituidos por aquellas acciones concretas del afiliado mediante las cuales demuestra su adherencia al régimen y voluntad de continuar en él, como la solicitud de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves. Al respecto la sentencia SL 413 de 2018, señaló que lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen

pensional determinado y en ese orden de ideas, es claro que JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ tenía plena voluntad y conocimiento cuando decidió permanecer en determinado régimen pensional durante tantos años.

Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en su literal e, indica:

“e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”;

En este contexto, para el 23 de junio de 2023 momento en el que JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, decidió solicitar ante la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES el regreso al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se encontraba imposibilitada legalmente mi representada para autorizar dicho traslado, toda vez que, de cara a la norma vigente, ya citada, y a la fecha de nacimiento del actor, que data del 16 de octubre de 1962, estaba para esas fechas a sus 60 años de edad.

Situación que legalmente se reafirma en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 así:

“ARTÍCULO 2o. Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así:

Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones.

a) La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes;

Jurisprudencia Vigencia

e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez;”. (negritas fuera de texto original)
(...)

Así las cosas, haciendo referencia al caso en concreto, la parte demandante al momento de elevar la solicitud de traslado y afiliación al régimen de prima media con prestación definida contaba con más de 52 años de edad, por lo tanto, supera la edad límite para que se acceda a dicha solicitud, es decir; no se radicó dentro del término legal cuyo límite temporal para el caso en específico era antes del 16 de octubre de 2014, es decir antes de que el señor JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ le faltaran 10 años para cumplir la edad para tener derecho a su pensión de vejez.

Así como se deduce de igual forma, que, para la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social, 1 de abril de 1994, no contaba con las 750 semanas de cotización equivalentes a 15 años de servicio, es decir, no era considerado como beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, beneficios transicionales que perdió con el traslado de régimen.

Al respecto, se ha pronunciado la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Pereira, en sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019), Radicación: 66001-31-05-003-2017-00364-01. M.P. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, para precisar lo siguiente:

“(…) ... la intelección que se continuará efectuando por esta Sala Mayoritaria es que si el afiliado es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 hay lugar analizar la ineficacia del traslado conforme a la tesis expuesta inicialmente por la CSJ, evento en el que se invierte la carga de la prueba a la AFP, quien debe acreditar que le suministró la información debida para que pudiera adoptar conscientemente la decisión de traslado, específicamente, en lo relacionado con la pérdida del régimen de transición.

Pero, en caso contrario, de no ser beneficiario actual de dicho régimen, debe estudiarse bajo la óptica de la nulidad del acto jurídico del traslado por vicios en el consentimiento, evento en el cual, le corresponde al afiliado acreditar los respectivos hechos de acuerdo con los Principios del Onus Probandi, de conformidad con el artículo 167 del C.G.P., so pena de la improsperidad de sus pretensiones. (...)

De conformidad con el artículo 1741 del Código Civil, la nulidad de los actos jurídicos o de los contratos es absoluta cuando se produce por un objeto o causa ilícita o por falta de las formalidades; mientras que cuando tiene un origen diverso como por ejemplo un vicio del consentimiento, sólo se genera nulidad relativa, que da lugar a la rescisión del acto o contrato.

En cuanto a los vicios el consentimiento, según lo establece el artículo 1508 ibídem, lo son el error, la fuerza y el dolo.

El primero –error–, puede serlo de derecho y, de hecho, pero aquel no vicia el consentimiento, conforme lo plantea el artículo 1509. (...)

A su vez, el artículo 1750 del Código Civil prevé que para alegar la rescisión en los eventos en que se alegue la ocurrencia de error o dolo, se cuenta con un plazo de cuatro años contados desde el día de la celebración del acto o contrato.

De otro lado el artículo 1743 ibídem dispone que la nulidad relativa se sana por el paso del tiempo o por ratificación de las partes. (...)

Bajo esos supuesto, declarar la ineficacia de la afiliación al RAIS de la demandante con base a los supuestos facticos que rodona su caso no tendría justificación y violaría gravemente el debido proceso de Colpensiones, quien sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de la eventual prestación a que tenga derecho la parte actora, siendo preciso resaltar en este punto la relatividad jurídica de los contratos, en virtud del cual Colpensiones es un

tercero frente al negocio o vínculo contractual contraído entre la parte demandante y las Administradoras de Fondos Pensionales de carácter privado, por lo que, tal acto jurídico solo tiene efectos inter partes y con ello, independientemente de la decisión adoptada por el Juez, Colpensiones no puede ser favorecida ni perjudicada con la decisión adoptada. Finalmente, frente al caso que nos atañe, ha de hacerse hincapié frente al agravio injustificado que padecería el equilibrio financiero del Sistema Pensional de ser procedente la nulidad de traslado y la obligatoriedad para Colpensiones de recibir al afiliado y sus aportes.

Dejando claro que todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por mi representada se encuentran permeadas de buena fe y la negativa a recibir nuevamente a la aquí demandante, se basa única y exclusivamente en razón al cumplimiento del deber legal, a quien le resulta aplicable la inoponibilidad por ser Colpensiones un tercero de buena fe. Entendida la inoponibilidad (mecanismo protector), como la ineficacia de un acto o la ineficacia de una nulidad frente a terceros. Es decir, que la ineficacia o nulidad, resultaría inoponible frente a terceros de buena fe como en este caso Colpensiones, a la par que la figura de la inoponibilidad constituye un mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, que en el caso de Colpensiones se consolida por el tiempo en que aquellos afiliados permanecieron en el RAIS, aunado a que la seguridad jurídica que se deriva de la inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros, que en este caso, tienen alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional.

De la misma manera, la Sala de Casación Civil, ha definido la inoponibilidad como aquella que “valora la confianza razonable de los terceros de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como válidamente celebrados”, raciocinio, que a su vez se deriva del principio de relatividad de los negocios jurídicos, es decir, que solo se producen efectos respecto de quienes voluntariamente participan de aquél.

Precisamente, la jurisprudencia en la especialidad civil, indica que la inoponibilidad no requiere de la validez del negocio jurídico, muy por el contrario, algo que es ineficaz entre las partes (como en este caso la afiliación al RAIS), si se tenga como eficaz frente al tercero de buena fe (en este caso Colpensiones). Así se ha dicho que: “cuyo caso no le interesa que no lo alcancen los efectos de un negocio válido e incontrovertible entre las partes, sino todo lo contrario, esto es que se tenga como válido frente a su calidad de tercero un negocio jurídico que carece de eficacia entre los celebrantes”. Es decir, que la inoponibilidad en este caso frente a un negocio jurídico ineficaz, permite que sus efectos se mantengan ante un tercero de buena fe, o en otras palabras para el caso concreto, que se mantengan los efectos de la afiliación al RAIS frente a Colpensiones.

Teniendo en cuenta los argumentos señalados anteriormente, se puede concluir que, en este caso concreto, las pretensiones propuestas por JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, NO están llamadas a prosperar, por cuanto puede evidenciarse en los documentos allegados al expediente que esta no cumple con los requisitos que se exigen para efectuar dicho traslado.

Por otro lado, si en gracia de discusión su honorable Despacho considera que es procedente declarar la nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional, debe tenerse en cuenta JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ al suscribir el formulario de afiliación con la AFP COLFONDOS S.A., PENSIONES Y

CESANTIAS declaró bajo la gravedad de juramento haber escogido el Régimen De Ahorro Individual Con Solidaridad de manera libre, espontánea y sin presiones, por lo que se infiere que el traslado al RAIS se hizo bajo los parámetros establecidos en los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, de ahí que, le concierne al actor demostrar que la información que se le suministró fue equivocada, con el propósito de obtener la declaración de ineficacia del aludido régimen pensional y posterior reconocimiento pensional, ello se afirma atendiendo a que JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, realizó aportes al RAIS desde el mes octubre de 1998 hasta la actualidad, por las particularidades del sub lite, se entiende que debe ser la parte actora quien pruebe los fundamentos de facto del libelo gestor, toda vez que es una manifestación implícita de voluntad de la afiliada.

Postura asumida en sentencia SL 413-2018 emanada del Sala de Casación Corte Suprema de Justicia, del veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018), Radicación N°52704 Magistrado Ponente CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO:

De esta forma, la jurisprudencia de la Sala en distintas ocasiones ha dado preeminencia a la intención real del trabajador o afiliado en asuntos relativos al derecho de la seguridad social por encima de las formalidades. Así, por ejemplo, en punto al disfrute de la pensión de vejez, ha sostenido que si bien la regla general es la desafiliación formal del régimen, en determinados casos es dable derivar la intención del afiliado a partir del cese definitivo de las cotizaciones al sistema (SL5603-2016; SL 9036-2017; SL 15559-2017; SL 11005-2017; SL 11895-2017); también frente a la figura de la «aceptación tácita de la afiliación», consistente en que, cuando hay silencio de la administradora de pensiones con relación a las posibles deficiencias de la afiliación o vinculación y, al tiempo, esta recibe el pago de aportes por un período significativo, se da una manifestación implícita de voluntad del afiliado, que lleva a que no pueda perderse el derecho a la pensión, a pesar de la falta de diligenciamiento del formulario (SL 40531, 19 jul. 2011; SL 14263-2015).

Como puede advertirse, en estas hipótesis se le ha dado un lugar preeminente a la realización de cotizaciones (afiliación tácita) o al cese de ellas (desafiliación tácita) como un claro reflejo de la intención del trabajador, más allá de la existencia del acto formal del diligenciamiento y entrega del formulario de vinculación o reporte de retiro. Por esta misma razón, en casos como el presente, donde se discute la materialización del acto jurídico de la afiliación o traslado, es relevante tener en cuenta los aportes al sistema, no como un requisito ad substantiam actus de la afiliación, como lo sostuvo el Tribunal, sino como una señal nítida de la voluntad del trabajador cuando existen dudas razonables sobre su genuino deseo de cambiarse de régimen. Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado.

En cuanto a la presunta nulidad de la afiliación, las disposiciones jurídicas para resolver la Litis lo son por analogía las prescripciones del Código Civil, que indican verbigracia en el artículo 1741 del C.C., que la nulidad de los actos jurídicos o de los contratos, cuando tiene un origen diverso del objeto o

causa ilícita, como un vicio del consentimiento, sólo genera nulidad relativa, que da lugar a la rescisión del acto o contrato, evento en el cual, se aplican los artículos 1502, 1508 y 1604 *Ibidem*; resultando perentorio el texto del artículo 1750 C.C., que a renglón seguido indica que el plazo para pedir la rescisión del contrato durará cuatro (4) años, así, si el traslado de JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ tuvo efectividad en la AFP COLFONDOS S.A., PENSIONES Y CESANTIAS desde el mes de octubre de 1998, la acción rescisoria fenecía en el mes de octubre de 2002, evidenciándose que si existió algún tipo de error en el consentimiento el mismo ha quedado saneado con el paso del tiempo, ya que, la presente acción sólo se vino a incoar veinticinco (25) años después de la suscripción del formulario a la AFP del RAIS; de modo que la acción rescisoria no fue utilizada.

En ese sentido, la normatividad del Código Civil reza:

“Artículo 1741. Nulidad absoluta y relativa: La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

Hay así misma nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.

Artículo 1750. Plazos para interponer la acción rescisión: El plazo para pedir la rescisión durara cuatro años.

Este cuatrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato.

Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuatrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad.

A las personas jurídicas que por asimilación a los menores tengan derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el cuatrienio y se contará desde la fecha del contrato.

Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieren designado otro plazo”.

Lo anterior en aras de demostrar que ha quedado saneado con el tiempo las nulidades relativas que hubiesen podido surgir, evidenciándose que si existió algún tipo de error en el consentimiento el mismo ha quedado saneado con el paso del tiempo y la prescripción de la acción rescisoria.

En igual sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente, SL-17595 de 2017 con ponencia del Doctor Fernando Castillo Cadena, aplicable en este caso, independientemente de si el afiliado es beneficiario o no del régimen de transición, ha indicado que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz, cuando no media la libre escogencia, que sólo la habrá:

“cuando se proporcione la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica” para más adelante agregar que “Aquí y ahora, se recuerda que no es dable argüir que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito”. (Subrayado fuera del texto original).

Finalmente, y por lo antes expuesto, se trae a colación del Despacho, los postulados de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, así:

ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

q. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los costos de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente ley.

ARTÍCULO 20. MONTO DE LAS COTIZACIONES. Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> La tasa de cotización continuará en el 13.5%* del ingreso base de cotización.

En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

A partir del 1o. de enero del año 2004 la cotización se incrementará en un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización. Adicionalmente, a partir del 1o. de enero del año 2005 la cotización se incrementará en medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%) en el año 2006. A partir del 1o. de enero del año 2008, el Gobierno Nacional podrá incrementar en un (1%) punto adicional la cotización por una sola vez, siempre y cuando el crecimiento del producto interno bruto sea igual o superior al 4% en promedio durante los dos (2) años anteriores.

El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalización de reservas pensionales.

(...) En ningún caso en el régimen de prima media se podrán utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez, para gastos administrativos u otros fines distintos.

Para financiar las pensiones de invalidez y de sobrevivientes de los actuales y futuros afiliados al ISS, se podrá trasladar recursos de las reservas de pensión de vejez a las de invalidez y sobrevivientes. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de las cuentas separadas en el Instituto de Seguros Sociales y demás entidades administradoras de prima media, de manera que en ningún caso se puedan utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez para gastos administrativos u otros fines distintos a pagar pensiones.

Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de solidaridad pensional, de conformidad con lo previsto en la presente ley en los artículos 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993. (...)"

Lo anterior, con el fin de solicitar al honorable Despacho, en el caso hipotético de considerar prósperas las pretensiones elevadas por JORGE ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, en virtud de lo dispuesto en la norma vigente respecto del funcionamiento del sistema general en pensiones y en particular de la obtención de los costos de administración de las cotizaciones que efectúan los afiliados a dicho sistema en cualquiera de los regímenes dispuestos. Se solicita al Despacho se sirva ordenar a la AFP del RAIS que traslade con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, no solo el contenido de la cuenta de ahorro individual del actor con sus respectivos rendimientos, sino los costos de administración que fueron percibidos por esta última y que al ser trasladados con destino a mi representada, ayudan a garantizar la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media quien no percibió por veinticinco (25) años ninguna comisión por la administración de los aportes del demandante.

Es importante tener en cuenta que el demandante basa su argumento señalando que el promotor de la AFP omitió o erró en la información otorgada para que el que el pudiera elegir a cuál régimen pensional quería pertenecer trayendo como consecuencia un perjuicio puntualmente en la Mesada pensional comparada con la que podría recibir en el RAIS, la acción que debió emprender es el resarcimiento de perjuicios, prescrita en el artículo 10 del Decreto 720 de 1994, así lo ha sostenido la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira en Sentencia del 2018300 en la cual señaló:

“si el supuesto de hecho expuesto en la demanda se encuentra dirigido a probar que el promotor de la AFP omitió o erró en la información otorgada para que el trabajador pudiese elegir a cuál régimen pensional quería pertenecer, y esto le ocasionó un perjuicio, por el valor de la mesada que será otorgada en el RAIS, entonces la acción a emprender no es la ineficacia de la afiliación, sino la de resarcimiento de perjuicios, sin que a través de esta se permita la nueva elección de régimen pensional o retorno al anterior, que es la consecuencia de salir adelante la ineficacia, que por el principio de legalidad no puede extenderse a estos supuestos fácticos”

Dado lo anterior, no debe existir ánimo conciliatorio, toda vez que se ha mostrado que el demandante se encuentra válidamente afiliado en el régimen de ahorro individual, dado que, la AFP COLFONDOS S.A., PENSIONES Y CESANTIAS vinculó al demandante de manera correcta, respetando la norma para dicho momento, así mismo el actor se encuentra próximo a completar la edad para acceder a su derecho pensional, teniendo actualmente 61 años de edad.

La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá a los 13 días del mes de marzo de 2024.



MARIA ISABEL CAMPO MARTINEZ
Secretaria Técnica
Comité de Conciliación y Defensa Judicial
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Proyecto: LCRC